Asunto T-296/97

Alitalia — Linee aeree italiane SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas

«Ayudas de Estado — Recapitalización de Alitalia por las autoridades italianas — Calificación de la medida — Criterio del inversor privado — Examen por la Comisión»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 12 de diciembre de 2000 II-3875

Sumario de la sentencia

1. *Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo — Fecha en que se tiene conocimiento del acto — Carácter subsidiario — Fecha de publicación*
[Tratado CE, arts. 93, ap. 2 (actualmente art. 88 CE, ap. 2), y 173, párr. 5 (actualmente art. 230 CE, párr. 5, tras su modificación)]

2. *Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Criterio del inversor privado — Ayudas financieras provenientes de fondos públicos, concedidas a una empresa al mismo tiempo que una aportación significativa de capital por parte de un inversor privado efectuada en circunstancias similares — Participación de los trabajadores en el capital de la empresa*
[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]
3. *Recurso de anulación — Acto impugnado — Apreciación de la legalidad en función de la información disponible en el momento de adoptarse el acto*
[Tratado CE, art. 173 (actualmente art. 230 CE, tras su modificación)]
4. *Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Criterio del inversor privado — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Límites*
[Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)]
5. *Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado común — Obligación de motivación — Alcance — Respuesta a los elementos esenciales de la argumentación del beneficiario de la ayuda — Argumentación encaminada a distinguir la situación del beneficiario de la ayuda de la situación que ha sido objeto del único precedente de la práctica decisoria de la Comisión*
[Tratado CE, arts. 92 (actualmente art. 87 CE, tras su modificación), 93, ap. 2, y 190 (actualmente arts. 88 CE, ap. 2, y 253 CE)]

1. De acuerdo con el propio tenor literal del párrafo quinto del artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, párrafo quinto, tras su modificación), el criterio de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto como inicio del plazo de interposición del recurso, tiene carácter subsidiario respecto a los de publicación o notificación del acto.
2. Una aportación de capitales mediante fondos públicos cumple el criterio del inversor privado que opera en las condiciones normales de una economía de mercado y no supone la concesión de una ayuda de Estado, entre otras cosas, si dicha aportación tiene lugar al mismo tiempo que una aportación significativa de capital por parte de un inversor privado efectuada en circunstancias similares.

Habida cuenta de que la Decisión impugnada, que no se notificó a la demandante, fue publicada, la fecha de publicación es la que marca el inicio del plazo de interposición del recurso.

La toma de participaciones de los trabajadores en el capital de una empresa en forma de consentimiento a una moderación salarial como contrapartida de acciones de la empresa por un importe total correspondiente al ahorro anual obtenido a término en materia de costes de mano de obra no

(véanse los apartados 61 y 63)

demuestra, por sí misma, que la aportación de capital efectuada mediante fondos públicos cumpla el criterio del inversor privado. En efecto, el comportamiento de un inversor privado en una economía de mercado se guía por perspectivas de rentabilidad, mientras que tal toma de participaciones de los trabajadores se inspira en consideraciones de mantenimiento del empleo y, por consiguiente, sobre todo en consideraciones de viabilidad y de supervivencia de la empresa de que se trate más que en perspectivas de rentabilidad.

(véanse los apartados 81 a 84)

Pues bien, la Comisión, cuando adopta un acto que requiere una apreciación económica tan compleja, goza de un amplio poder de apreciación y el control jurisdiccional de dicho acto, aunque en principio es «completo» por lo que respecta a la cuestión de si una medida está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1), se limita a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para efectuar la elección impugnada, la falta de error manifiesto en la apreciación de dichos hechos o la inexistencia de desviación de poder. En particular, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir su apreciación económica por la del autor de la Decisión.

3. En el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado. En particular, las apreciaciones complejas hechas por el autor del acto impugnado deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones.

(véase el apartado 86)

4. La apreciación por la Comisión de la cuestión de si una inversión cumple el criterio del inversor privado requiere una valoración económica compleja.

(véase el apartado 105)

5. Aunque la Comisión no está obligada a contestar a todos los argumentos invocados por una parte interesada durante el procedimiento administrativo de examen de las ayudas de Estado por una sociedad que, en su calidad de beneficiaria de la medida impugnada es una parte interesada, en el sentido del artículo 93, apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 2), en todo caso está obligada a exponer de manera suficiente, en su Decisión, las razones por las que no cabe acoger los elementos esenciales de la argumentación de dicha parte.

Por consiguiente, habida cuenta del hecho de que una Decisión anterior constituye el único precedente de la práctica decisoria de la Comisión referente al cálculo del índice anual de rendimiento mínimo para una inversión efectuada por las autoridades públicas en una compañía aérea, procede considerar que la argumentación de la parte interesada encaminada a distinguir su situación de aquella de la sociedad objeto de la Decisión anterior reviste un carácter esencial para

demostrar que la inversión efectuada mediante fondos públicos cumple el criterio del inversor privado. En tales circunstancias, la Comisión, so pena de faltar a su obligación de motivación, tiene obligación de responder a la misma en su Decisión.

(véase el apartado 132)